



Desde Uruguay repic  la llamada millonaria

Descripci n

Hasta finales de 2006, el Gobierno de Hugo Ch vez entabl  negociaciones con diversas empresas extranjeras del  rea de las telecomunicaciones con miras a crear una telef nica estatal que compitiera con la privada Cantv.

El proyecto qued  amparado bajo el nombre de CVG Telecom. Propuestas desde Uruguay y China estaban sobre la mesa para ser consideradas en la contrataci n de equipos, software y servicios, que sentar an las bases de esa nueva empresa estatal tutelada por la todopoderosa Corporaci n Venezolana de Guayana (CVG).

El anuncio de la nacionalizaci n de Cantv en enero de 2007, y su posterior compra a la estadounidense Verizon, dieron al traste con el proyecto. De todas maneras, y a pesar de la cancelaci n, hubo tiempo para los negociados.

En 2005 se hab a creado el Fondo Bol var-Artigas entre los Gobiernos venezolano de Hugo Ch vez y uruguayo de Tabar  V squez, entonces en su primera administraci n. Como otros fondos binacionales impulsados por Caracas durante el auge de los precios petroleros, este capitalizaba como inversi n o compra de bienes locales unos 200 millones de d lares, parte de la deuda de Montevideo por la factura de importaciones de hidrocarburos.



[Hugo ChÃ¡vez y TabarÃ© VÃ¡squez](#)



Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)

Durante la primera macrorrueda de negocios organizada en el marco del Fondo, en Caracas en julio de 2005, uno de los participantes llamó la atención: Javier Vázquez, ingeniero, hijo del presidente Vázquez, quien como privado intermedió en algunas de las transacciones firmadas entonces con financiamiento del fideicomiso binacional, en particular, para la adquisición de software uruguayo. Aunque las sospechas sobre tráfico de influencias y pago de sobornos -que llegaron a discutirse en el parlamento y la justicia uruguayas- ensombrecieron la primera gestión de Tabaré Vázquez, no hubo resultado concluyente en las investigaciones. Mientras, en Venezuela, el asunto pasó por debajo de la mesa.

Ahora, más de una década más tarde, con Tabaré Vázquez de nuevo en la presidencia, documentos incluidos en los llamados Panama Papers, así como actas judiciales y registros públicos, analizados durante meses por la revista *Búsqueda* de Montevideo, revelan una historia en la que varios millones de dólares del negocio en el que trabajó activamente el hijo del presidente uruguayo circularon por paraísos fiscales; algunos de esos fondos terminaron en la cuenta bancaria del hermano de quien a la sazón se desempeñaba como Director de Planificación Estratégica de CVG Telecom, quien entre 2005 y 2006 tuvo a su cargo el análisis de viabilidad de los contratos uruguayos de los proyectos de *software*.

Lo que primero se supo

La trama tuvo inicio gracias a dos decisiones adoptadas por el Gobierno de Hugo ChÁvez a fines de 2004. Primero creÃ³ una compaÃ±Ãa estatal de telecomunicaciones, CVG Telecom. Y despuÃ©s, el 23 de diciembre, aprobÃ³ un decreto en el que fijaba como polÃtica pÃblica la âadopciÃ³n del software libreâ. TambiÃ©n, a los pocos meses, la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, sancionaba la Ley OrgÃnica de Ciencia, TecnologÃa e InnovaciÃ³n (Locti).

El complemento ideal para facilitar los negocios a los uruguayos llegÃ³ el 2 de marzo del 2005. Ese dÃa a los gobiernos de Venezuela y Uruguay âcuyo presidente, TabarÃ© VÃsquez, habÃa asumido el dÃa antesâ firmaron un acuerdo de âcooperaciÃ³n estratÃgicaâ que implicaba crear el Fondo BolÃvar-Artigas, un fideicomiso de 200 millones de dÃlares a partir de un porcentaje de las compras de petrÃleo que realizaba la petrolera uruguaya estatal Ancap a su similar venezolana, Pdvsa. Mediante ese mecanismo, las empresas estatales venezolanas podrÃan pagar contra ese fondo las compras de bienes y servicios de empresas pÃblicas o privadas de Uruguay.



AdministraciÃ³n Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP)

Uno de los primeros que detectÃ³ las posibilidades de los negocios del software fue Javier VÃsquez. El ingeniero trabajaba entonces para una corporaciÃ³n privada, Interamericana de CÃmputos (Inco), y

manejaba la cuenta de Artech, una operación especializada en software libre.

Uno de los acuerdos que cristalizó, justamente, tras la implementación del Fondo binacional, fue la contratación por parte de CVG Telecom de servicios de software y hardware a empresas uruguayas por 63,6 millones de dólares. En febrero del 2006 las contratistas uruguayas, entre las que estaban Inco y Artech, presentaron su propuesta conjunta y en marzo firmaron el contrato con la estatal venezolana, previendo un proyecto de tres años de duración. El hijo del presidente Vázquez participó en el proceso de elaboración y presentación de la oferta ganadora.

El acuerdo provocó que otro empresario uruguayo vinculado al software, Eduardo Gómez Canon, denunciara que le habían robado su oportunidad. ¿Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era más?, declaró a la prensa. El entonces diputado Washington Abdala (del opositor Partido Colorado) solicitó la creación de una comisión investigadora en el Parlamento y después llevó el tema a la justicia penal. Después de meses de interrogatorios y tras el fallecimiento de Gómez Canon, cuyas conductas erráticas habían hecho que perdiera credibilidad, el fiscal Juan Gómez pidió el archivo del caso.

Al olvido del caso también contribuyó la nacionalización de Cantv en 2007. Ya no hizo falta todo el proyecto, que involucraba a los uruguayos, de una telefónica pública. Partes fueron absorbidas por la compañía recién adquirida y otra siguió de la mano de CVG Telecom. No se trató solo de la adquisición de unos *data center* sino de la provisión de servicios de software.

Lo que ocurría por debajo

Poco después de la firma del acuerdo entre las empresas uruguayas y CVG Telecom, el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en servicios offshore, recibió un par de requerimientos. Con apenas días de diferencia, desde Venezuela llegaron dos solicitudes para comprar sociedades anónimas y abrir cuentas en Panamá que después recibirían dinero del proyecto financiado por el Fondo Bolívar-Artigas.

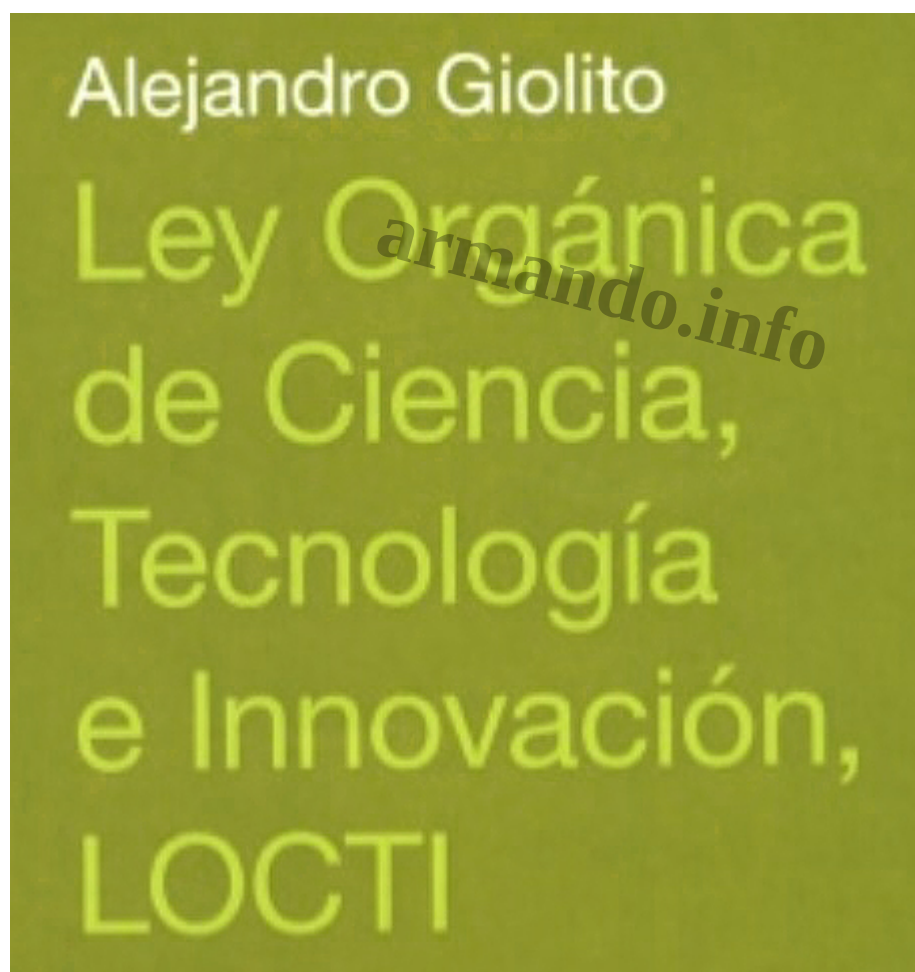
El 21 de marzo de 2006 José Antonio Fraga compró a través de MF la empresa panameña Eliston S.A. Y para abril ya tenía una cuenta en Credicorp Bank. La velocidad era necesaria porque menos de un mes después recibió el primer giro desde Uruguay por 1,8 millones de dólares.

Fraga solicitó a los panameños que emitieran una factura con una oferta de servicios para Fernando Burstin, uruguayo, propietario de Interamericana de Computos, Inco, por una asesoría tecnológica correspondiente al proyecto CVG-Telecom. Ello se lee en la propia factura, que forma parte de los once millones de documentos contenidos en la filtración llamada Panama Papers, recibida originalmente por el diario *Süddeutsche Zeitung* de Múnich, Alemania, y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) con sede en Washington DC.

A pedido de Burstin, Fraga cambió el destinatario de la factura: en lugar de dirigirla a Inco, debía ir a nombre de Shidner Corporation S.A., otra sociedad del uruguayo Burstin creada ese año.

Parte del dinero que giró Burstin a Fraga siguió moviéndose por algunos meses más. En septiembre de 2006, 690.000 dólares llegaron a una cuenta en Panamá de Hallway International S.A. Esa offshore fue adquirida en marzo del 2006 por Alejandro Giolito, cuyo hermano Pablo era entonces alto ejecutivo de CVG Telecom.

Los hermanos Giolito estaban vinculados al tema informático. Mientras Pablo detentaba el cargo de Gerente de Planificación Estratégica de la estatal, Alejandro trabajaba en una prestigiosa firma caraqueña que asesoró a autoridades ministeriales en la discusión de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Antecedentes	Aportantes	
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones para el desarrollo económico, social y político del país, estableciéndole obligaciones tanto al Estado venezolano como al sector privado. En cumplimiento de ese mandato constitucional, en el año 2001 se dicta el primer Decreto-Ley en la materia, y luego, en el año 2005, la Asamblea Nacional debate y sanciona la vigente Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI. Un año después, en el 2006, se	"Las empresas, dice, dependiendo del sector a que se dediquen, deben aportar o invertir un porcentaje de sus ingresos brutos territoriales obtenidos anualmente. Si es una empresa petrolera el 2%; si es una empresa del sector minero o eléctrico, el 1%, y si es de otro sector productivo, el 0,5%. Se considera que existe aporte cuando los recursos son destinados bien a organismos adscritos o fondos dependientes del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, MPPCTII, o a otras empresas públicas o privadas que hayan sido certificadas como beneficiarias de dichos aportes, como	so Mi ci -te pr Ap ma Ot Te de ma rel inv co ci De es di ta Es pu ej

Interrogado telefónicamente para esta pieza por la reportera de Armando.Info, Pablo Giolito explicó que su trabajo en CVG Telecom consistió en analizar si un proyecto tenía lógica y viabilidad para estructurar su desarrollo. Más allá de eso yo no tenía niveles de aprobación, no tenía presupuesto para eso. Simplemente me llegaba como Planificación Estratégica, yo agarraba y decía: "Bueno están todos estos proyectos acá y el más viable es éste o podemos darle la vuelta a este", detalló.

En ese momento, a su juicio, la propuesta uruguaya no tenía rivales a la hora de poner en marcha el proyecto CVG. "Hacían falta fondos adicionales", rememora, y si bien había una oferta china, la única opción realmente factible en ese momento porque no requería dar iniciales o poner una contraparte en dinero, eran esos fondos uruguayos.

Giolito se desempeñó como gerente en CVG Telecom entre octubre del 2005 y agosto del 2006, y admite que por su trabajo se reunió con unos siete empresarios uruguayos del software. El período que integró la compañía estatal coincide con el momento en que los uruguayos presentaron la propuesta ganadora y se firmó el acuerdo.

Offshores y bienes raíces

En los archivos de Mossack Fonseca reposan las pistas de la offshore que Alejandro Giolito incorporó en Panamá; mientras su hermano Pablo aún trabajaba en CVG Telecom.

«Sí, yo sabía que lo había hecho», acepta [Pablo Giolito](#) durante la conversación telefónica, «pero era un negocio de familia en el que yo no estaba involucrado». Luego, sin reparar en posibles contradicciones, durante la entrevista explica que llegó a interesarse en la gestión de la empresa para «ayudar» a su hermano en el negocio inmobiliario. Pero que, todavía así, de las transferencias recibidas, «¿quién las hizo, cómo las hizo?» No te lo puedo asegurar si efectivamente ocurrió.

Lo cierto es que la primera transferencia que recibió la offshore de Alejandro Giolito fue en septiembre del 2006 y provino de Fraga, según consta en la filtración de Mossack Fonseca. Antes de llevarla adelante, el bufete pidió a Fraga que justificara el movimiento de dinero. «La operación se basa en la declaración de dividendos de Eliston S.A. a mi persona y los fondos serán transferidos a Hallway International, S.A. con quien existe una deuda pendiente», respondió Fraga.



[Alejandro Giolito](#)



[Pablo Giolito](#)



Pablo Giolito

Los panameños le dijeron que necesitarían otros documentos que explicaran la deuda. Entonces la estrategia cambió³. Giolito les mandó una factura en la que daba detalles de la “asesoría en el desarrollo” de “aplicaciones informáticas” que su offshore recién creada le había provisto a la de Fraga. El precio final era de 670.973 dólares por 2.900 horas de trabajo. El detalle revelador que incluye la factura es la lista de conceptos que se cobran: “Consultoría en operaciones CPD”, “Seguridad ante fraude”, “Seguridad internet e implementaciones” y “Mejores prácticas CPD”. Son los mismos rubros que Fraga le había facturado antes a Fernando Burstin, el uruguayo jefe de Javier Vázquez.

Fuentes del sector informático consultadas por el reportero de *Búsqueda* en Montevideo calificaron como “por lo menos llamativas” la falta de detalle en las facturas y los montos que se manejan “en especial el costo de más de 230 dólares por hora”. Burstin rechazó que esos montos estuvieran inflados.

Ni bien tuvieron el dinero en su cuenta, los hermanos Giolito compraron propiedades por un total superior a los 580.000. En dos meses adquirieron un apartamento y un *penthouse* en el lujoso California Mall de Las Mercedes, una zona costosa del sureste de Caracas. También adquirieron una oficina en el World Trade Center de Montevideo, puesto a nombre de su madre, y pagada a tercios

junto a Fraga y a otra socia, la uruguaya-venezolana Laura Pintos TrÃas.

Pablo Giolito aduce que â??en 2008 o 2009â?• proveyÃ³ servicios a Fraga por â??consultorÃaâ?•.

Fraga transfiriÃ³ a Giolito otros 796.348 dÃ³lares en enero del 2008. Igual que en la primera ocasiÃ³n, antes de mandarle dinero al ex gerente de CVG Telecom, Fraga habÃa recibido una cifra millonaria desde Montevideo: Burstin le girÃ³ 1,6 millones en setiembre del 2007. (Fraga declarÃ³ al banco que tenÃa previsto recibir del uruguayo otros dos giros).

La factura para justificar la nueva transacciÃ³n incluÃa los mismos detalles de servicios de software que la anterior, aunque en su â??segunda faseâ?•. Era la segunda factura que emitÃa la empresa de Giolito en toda su historia; la primera habÃa servido para justificar la transferencia inicial de 2006.

Ni bien llegÃ³ la segunda remesa a su offshore, los hermanos Giolito adquirieron otras tres propiedades por un total que superÃ³ 500.000 dÃ³lares.

Pablo Giolito aduce que â??en 2008 o 2009â?• proveyÃ³ servicios a Fraga por â??consultorÃaâ?•.

Sus declaraciones son contradictorias entre sÃ y tampoco se compaginan con lo que dicen los documentos incluidos en los Panama Papers.

Ya para 2010, la anualidad de pago de Giolito por empresas administradas por Mossack Fonseca correspondÃa a cuatro empresas: Hallway Internacional, Glenrock Properties Inc, Kinborough Investments S.A. y Kerwin Properties Incorporated.



Registro de Hallaway

En los años siguientes, Pablo Giolito y Laura Pintos, quienes se conocían desde los tiempos en que Giolito trabajaba en la oficina en Caracas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como Oficial de Programas de Tecnologías de Información y Comunicación, también se hicieron socios en varias empresas venezolanas, junto con José Antonio Fraga. Algunas, como Parking Valla C.A. y Telecomunicaciones Erictelco, ya no están activas.

¿Laura fue socia de Tony (José Antonio Fraga) toda la vida, desde todas las empresas que ellos han tenido?, dice Pablo Giolito. Y de su ex socio Fraga, dijo no verlo desde hace unos cinco años.

El del estribo

En 2009 los Giolito preveían recibir al menos una transferencia más, según se lee en las comunicaciones contenidas en los Panama Papers. Debía llegar en septiembre de ese año, directo desde la empresa uruguaya de Fernando Burstin -jefe de Javier Vázquez, el hijo del presidente

TabarÃ© VÃ¡squez-

En su declaraciÃ³n a la justicia uruguaya en diciembre del 2008, Burstin dijo que no habÃ­an terminado ni de hacer los trabajos ni â??de cobrarâ? en Venezuela. Requerido hace pocos dÃ­as por el reportero de *BÃ³squeda*, Burstin insistiÃ³ en que, a diciembre de 2007, no tenÃ­an â??deuda alguna con el proyecto (â?!) Ni se pagÃ³ nada con posterioridad a eso. Â¿Por quÃ©? Porque los tipos nos cortaron el proyecto para no pagarnosâ?.

El empresario uruguayo dijo que contratÃ³ a Fraga para el proyecto, pero que desconocÃ­a cualquier informaciÃ³n sobre las transferencias que recibÃ³ Giolito, el ex gerente de la estatal venezolana.

Giolito tambiÃ©n negÃ³ haber tenido una relaciÃ³n comercial con Burstin. â??Todas las relaciones que tÃ© ves allÃ [en los Panama Papers], nunca son con Fernando Burstin. Yo nunca he tenido una relaciÃ³n directa con Ã©lâ?, asegurÃ³ el venezolano al ser consultado por telÃ©fono. â??Muchas de las cosas de las que estÃ¡n ahÃ se toman como ciertas para nunca ocurrieronâ?, aÃ±adiÃ³. Sin embargo, despuÃ©s dijo que sÃ habÃ­a tenido previsto cobrar 860.000 dÃ³lares, aunque por un servicio de â??consultorÃ¡â? que habrÃ­a ofrecido a Fraga.

Pero tambiÃ©n a este respecto los archivos de Mossack Fonseca desmienten a Giolito.

Pablo Giolito enviÃ³ en agosto de 2009 un correo electrÃ³nico a Fernando Burstin, del que el bufete panameÃ±o recibÃ³ una copia. Mediante el texto Giolito ponÃ­a en contacto a Burstin con Egbert Wetherborne, quien atendÃ­a â??los interesesâ? de su sociedad anÃ³nima en el bufete panameÃ±o. Diez minutos mÃ¡s tarde, Wetherborne escribiÃ³ a otros empleados de MF para informarles que â??un sobreâ? llegarÃ­a a sus oficinas. â??Es la documentaciÃ³n de soporte para un cheque que se depositarÃ¡ en la cuenta bancaria de la sociedad Hallway Internationalâ?, detallÃ³.



Mossack Fonseca & Co. fue un bufete de abogados de Panamá; con representación en muchos países del mundo a través de 44 filiales, nueve de ellas en China

Dos semanas después Giolito le mandó otro correo a Wetherborne, en el que estaba copiado Burstin, en el que le informaba que las cosas se movían. ¿?El día viernes 4 me informaron que fue realizada la entrega (por parte de la casa de bolsa) de un sobre a tu nombre en las oficinas de Mossfon, contenido con la documentación y cheque conversado hace algunas semanas entre nosotros. Te pido por favor corroborar esta información para yo informarle al señor Burstin de que ha finalizado este proceso?.

Pero nada había llegado. Ante esto, Giolito insistió: ¿?El ingeniero Burstin está realizando la llamada a la casa de bolsa de Panamá para determinar la información exacta. Los mantendremos informados tan pronto nos comuniquen los detalles?.

Una semana después tenía más información para los panameños, según otro correo. ¿?Acabo de hablar con el señor Burstin, me indica que de la casa de bolsa le informaron que hubo un problema con la emisión del cheque, que fue corregido, y que desde la semana pasada está a la espera de que le confirmen el envío?.

Al día siguiente, fue el propio Burstin el que escribió a los panameños (desde el correo corporativo de Inco, Interamericana de Computos): ¿?Ante nada mis saludos y disculpas por la demora. Recién hablé con nuestro contacto de Uruguay quien me confirma que se estará entregando

mañana por la mañana. En paralelo le estoy enviando a Pablo el contacto en Panamá para que lo contacte directamente en el día de hoy.

La casa de bolsa panameña a la que recurriría Burstín para hacer la transacción, según Giolito, era Thales Securities.

Pero algo falló. Teníamos pendiente la recepción de estos documentos y un cheque, hubo inconvenientes con este último por lo que decidieron realizar una transferencia, escribí Giolito. Y agregué enseguida que ahora sí el dinero debía llegar a su cuenta bancaria porque Burstín le había dado el número de referencia de la transacción.

Pasaron dos días y la transacción no estaba acreditada en la cuenta. Giolito mantenía sus buenos modales en los mails, pero parecía un poco más ansioso. Tal como les anexé e incorporé en el mail anterior, lo que necesito investigar es una transferencia en proceso por un monto de US\$860.600 procedente del HSBC, escribí. Necesito que validen si esta información es correcta y qué ha pasado que no ha llegado a la cuenta de Hallway.

armando.info



HSBC Holdings plc (por sus siglas en inglés de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), es una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido.

El enredo continuó durante un prolongado intercambio de correos, que concluye en la filtración de los Panama Papers sin despejar si el inconveniente fue superado. En todo caso, el hilo quedó registrado para documentar una relación, al menos de confianza, entre Pablo Giolito y Fernando Burstin.

Entre tanto, y mientras el dinero seguía circulando entre cuentas offshore, la avidez venezolana por proveedores de telecomunicaciones parecía no tener fin.

En noviembre de 2006, el mismo año en que Pablo Giolito -quien había diagnosticado la oferta uruguaya como la preferible- dejara CVG Telecom, y apenas semanas antes de que Chávez nacionalizara Cantv, el comandante revolucionario anunció la suscripción de acuerdos entre Venezuela y la provincia china de Shandong para la puesta en funcionamiento de celdas de tecnología CDMA 450, entre CVG Telecom y Huawei Technology.

Giolito, en su declaración telefónica para Armando.Info y *Básqueda*, recordó que esa oferta china fue una de las que le tocó descartar: ¿Querían vender ellos? Ellos querían vender tecnología CDMA en frecuencia 450. ¡Basura! Para esa época, doce años atrás, eso ya era basura y el proyecto estaba montado. Una de mis responsabilidades fue decir que eso no servía.

Pero, de alguna manera, los chinos ganaron.

Fecha de creación

2018/08/23